

Desarrollo jurisdiccional del proceso de revocación de mandato al Ejecutivo Federal 2022

Juan Antonio GARZA GARCÍA¹
Jorge RESÉNDIZ OLOARTE²

Introducción

En los últimos años en nuestro país se ha buscado implementar diversos mecanismos de democracia directa o semidirecta como vías de vinculación y acercamiento de la sociedad civil con sus gobernantes y representantes, con el objetivo de que los ciudadanos puedan incidir en las decisiones públicas, así como llevar a cabo el escrutinio de la gestión pública y la exigencia de resultados y rendición de cuentas, de conformidad con el marco normativo e institucional que se ha venido generando.

Estos mecanismos de democracia semidirecta o directa, conocidos comúnmente como procedimientos de participación ciudadana, no son homogéneos o únicos para el territorio nacional, sino que cada entidad federativa y la propia Federación, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que les asiste, pueden diseñar e implementar aquéllos que resulten acordes o congruentes con la realidad de la sociedad y la demarcación territorial de que se trate o bien, resulten idóneos para la atención de problemática determinada en el ámbito correspondiente. Así, es posible advertir que existen diferencias sustantivas en cuanto a sus requisitos de procedibilidad, así como en las reglas para su implementación y desarrollo, atendiendo a las características particulares de cada caso.

Entre estos mecanismos de participación ciudadana se encuentra el de la revocación del mandato, como una vía a través de la cual la ciudadanía puede evaluar la gestión de sus gobernantes y decidir si debe ser removido del cargo por no haber respondido a la confianza que le fue otorgada a través del voto.

El mecanismo en comento fue regulado en el ámbito federal hasta finales de 2021 y aplicado por primera vez en abril de 2022, para la eventual revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que, dado lo novedoso de su implementación y las diversas situaciones que se presentaron a lo largo del proceso, que van desde un deficiente marco normativo, insuficiencias presupuestales para su adecuado desarrollo, así como la alta litigiosidad de algunos rubros y que comprenden diversas irregularidades acreditadas por las autoridades electorales competentes, debe ser

¹ Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. E-mail: jagarzagarcia@hotmail.com

² Asesor de Consejero Electoral en el Instituto Nacional Electoral. E-mail: jorgeresendiz00@hotmail.com

motivo de un riguroso análisis y estudio, para poder perfeccionarlo y que, en futuras ocasiones, se pueda llevar a cabo en óptimas condiciones.

Atento a lo anterior, el objeto de la presente ponencia es analizar las características esenciales del mecanismo de revocación del mandato del Presidente de la República que tuvo lugar en 2022, así como algunos aspectos que dieron origen a la presentación de diversas quejas y medios de impugnación que dada la insuficiencia del marco normativo, debieron ser colmadas a través de criterios y precedentes de autoridades jurisdiccionales.

Para ello se propone, en primera instancia, la descripción del mecanismo de participación ciudadana en concreto: su definición legal, sus características y las etapas del proceso respectivo; asimismo, se presenta un análisis de las etapas fundamentales de su organización y desarrollo, a manera de representar la magnitud del mecanismo en comento y sus repercusiones e incidencia en la vida democrática y política del país.

Acto seguido, se analizan aquellos rubros que presentaron alto grado de conflictividad y en los que resultó indispensable la intervención jurisdiccional para esclarecer las cuestiones que no estaban contempladas en el marco legal aplicable. En este punto, se propone el análisis de los precedentes jurisdiccionales surgidos con motivo de la expedición de los Lineamientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocación del mandato; de la pregunta que fue puesta a consideración de la ciudadanía; los medios utilizados para la recolección de las firmas de apoyo ciudadano necesarios para solicitar la organización del proceso, así como el aspecto presupuestal para la organización del mismo.

En este apartado, también se analizan aquellas resoluciones y precedentes que si bien no versaron de manera directa sobre la organización del proceso, sí repercutieron en la misma. Tal es el caso, por ejemplo, del Decreto interpretativo para emitir propaganda y posicionamientos de servidores públicos, a pesar de existir restricción legal para ello, así como diversas infracciones por el despliegue de actos de propaganda de la revocación del mandato, lo que pudo haber incidido en la voluntad ciudadana o el sentido de su voto.

En el tercer apartado se analiza el Dictamen emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el cual se determinó que el proceso no podía tener efectos vinculantes al no haberse cumplido uno de los requisitos para ese efecto previstos en la ley de la materia.

Finalmente, se señalan las conclusiones del análisis efectuado.

1. Revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.

a) Concepto

El mecanismo de revocación del mandato surge como una vía para hacer patente la pérdida de confianza a un gobernante o representante electo, en virtud de no haber resultado idóneo para el cargo o haber incurrido en actos que se consideren contrarios a los principios y valores del adecuado servicio público o faltas de probidad, de manera que, dada la importancia de sus efectos, es evidente que debe contar con determinados requisitos de procedibilidad, de organización y desarrollo, así como para que surta plenos efectos jurídicos, aunado a que la normatividad que le regule debe garantizar la congruencia del orden jurídico, así como prever los efectos de dicha revocación para la continuidad de funciones sustantivas del Estado.

Por lo que se refiere a la regulación de la revocación de mandato en el orden jurídico mexicano, la ley de la materia establece, en sus artículos 2 y 5 que el mecanismo de revocación del mandato consiste en “el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible” (LFRM, Artículo 2, 2021). Asimismo, se le define como el “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza” (*Ibidem*, Artículo 5, 2021).

De los preceptos transcritos es posible desprender diversos elementos definitorios:

- a) Se solicita por la ciudadanía
- b) Puede tener por efecto la conclusión anticipada de la gestión
- c) A partir de la pérdida de la confianza

Se trata, entonces, de un mecanismo de participación que permite al ciudadano evaluar el desempeño del titular del Ejecutivo federal y, en su caso, previo cumplimiento de los requisitos legales, removerlo del cargo de forma previa a que concluya el período para el que fue electo. No debe verse como un instrumento para ratificar la designación del presidente de la República.

A propósito de lo anterior, es necesario señalar que el párrafo séptimo del artículo 84 constitucional, reformado mediante decreto del 20 de diciembre de 2019, determina que en caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo

quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional (CPEUM, Artículo 84, 2019).

b) Etapas del proceso de revocación del mandato

Una vez expuesto lo anterior, procede referir, *grosso modo*, las etapas que integran el mecanismo de participación ciudadana que se analiza.

- **Aviso al Instituto Nacional Electoral:** Los ciudadanos interesados deberán informar al Instituto la intención de organizar la consulta ciudadana de revocación de mandato durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del Presidente de la República. El Instituto dispondrá los formatos y mecanismos para recabar las firmas referidas.
- **Petición:** Para que la solicitud surta efectos legales, debe ser acompañado de un número de firmas equivalente, al menos, al tres por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas³.
- **Momento de solicitud:** Esta solicitud puede ser presentada en una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Ejecutivo federal electo⁴.

Con la presentación de la solicitud con la documentación anexa, inicia propiamente dicho el proceso de revocación de mandato.

- **Convocatoria:** Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, el Instituto expedirá la convocatoria respectiva que, entre otros elementos, contendrá:
 - Etapas del proceso
 - Presidente de la República que será sujeto de revocación de mandato
 - Pregunta
 - Fecha de la jornada de consulta de revocación de mandato
 - Reglas para la participación de los ciudadanos en el proceso

³ Para el ejercicio celebrado en el 2022, la Lista Nominal de Electores estaba integrada por 91,940,907 personas, por lo que era necesario acreditar el apoyo de 2,758,220 personas, distribuidas en 17 entidades federativas. El INE validó 3,451,843 firmas, en 25 entidades federativas.

⁴ El plazo corrió de octubre a diciembre de 2021.

- **Difusión.** La difusión del proceso de consulta de revocación de mandato estará a cargo del Instituto Nacional Electoral, resultando aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 134 constitucional (LFRM, Artículo 19, 2021; INE 2022).
- **Efectos:** Tanto la constitución como la ley reglamentaria establecen que para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores y, del total de participantes, una mayoría absoluta debe manifestarse en ese sentido⁵.

Si fuera el caso, el párrafo séptimo del artículo 84 constitucional determina que, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional.

Como se puede apreciar, si bien dicho mecanismo guarda semejanzas con los procesos electorales constitucionales por cuanto a algunas de sus etapas de organización y desarrollo, es importante destacar las características particulares sustantivas, principalmente por lo que se refiere a la solicitud por parte de la ciudadanía, las facultades para llevar a cabo la promoción para la participación en el ejercicio y de la consulta propiamente dicha.

Efectivamente, la solicitud para que la autoridad electoral lleve a cabo el ejercicio, debe hacerse por una determinado número de ciudadanos debidamente inscritos en el Padrón Electoral, mientras que la difusión de dicho mecanismo está a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los Institutos Estatales Electorales, de manera que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, no podrán llevar a cabo ninguna actividad relacionada con dicha difusión, y durante el desarrollo del mismo, sólo podrían difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil (*Idem*).

c) Numeralia de la Revocación de Mandato 2022

A continuación, nos parece importante exponer datos sobre el ejercicio llevado a cabo por primera vez a nivel federal, a efecto de dimensionar su magnitud y alcances en la vida democrática del país.

⁵ Es decir, de una Lista nominal integrada por 92,823,216 personas, debían participar al menos 37,129,287, y de ellos 18,564,643 manifestarse a favor de la revocación de mandato.

En primera instancia, es de referirse que, en cumplimiento de su atribución de difundir la consulta y promover la participación ciudadana, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo tres foros de discusión a nivel nacional para el debate informado de la ciudadanía. Dichos espacios deliberativos tuvieron lugar los días 25 y 31 de marzo, y 3 de abril (INE 2022-1, 66).

En cuanto al apoyo requerido, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021, 24,029 ciudadanos manifestaron su intención de promover la consulta y recabar firmas para solicitar la revocación de mandato. De dichas manifestaciones, 22,419 resultaron procedentes (INE 2022-2, 11-4).

En el mismo sentido, de acuerdo con la autoridad electoral, la recepción de firmas transcurrió del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2021, en el cual se recibió un total de 11,141,953 firmas. 1,382,031 fueron recabadas a través de la aplicación móvil habilitada para tal efecto, de las cuales fueron válidas 1,085,051 (*Ibidem*, 34-6).

En cuanto a los formatos impresos que contenían las manifestaciones de apoyo, los promoventes de la consulta presentaron un total de 9,759,922, de los cuales se validaron con la lista nominal un total de 2,366,792 registros (*Ibidem*, 26-32).

Es decir, en este rubro, se verificó un total de 3,451,843 firmas de apoyo recabadas tanto por la aplicación móvil y los formatos impresos, lo que representó el 125% del mínimo de firmas requerido por la normatividad. Dichas firmas se encontraron distribuidas en 25 entidades federativas, por lo que se tuvo por satisfecho el requisito en cuestión (*Idem*).

Es importante señalar, asimismo, que durante el proceso de revisión de las firmas se detectaron diversas irregularidades, siendo las más frecuentes las siguientes: fotografía no válida; firma no válida; credencial para votar en fotocopia; registros duplicados; datos no encontrados, o bajas del padrón electoral (*Ibidem*, 28)

En cuanto a la organización de la consulta de revocación de mandato propiamente dicha, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, para la integración de las mesas receptoras de votación, se insaculó a un total de 7,159,182 ciudadanos para la selección de los funcionarios electorales correspondientes y se llevaron a cabo dos etapas de capacitación celebradas entre el 9 de febrero y el 6 de marzo, y entre el 11 de marzo y el 9 de abril.

El personal de campo ascendió a 12,064 ciudadanos, de los cuales 1,512 fueron supervisores y 10,588 capacitadores asistentes electorales.

Se instaló un total de 57,488 casillas, de las cuales 24,458 fueron básicas; 32,690 contiguas y 300 especiales, a razón de una por cada distrito electoral uninominal federal.

El padrón electoral utilizado para este proceso comprendió a 95,427,701 ciudadanos, de los cuales, 49,438,848 (51.81%) son mujeres, y 45,988,853 (48.19%) son hombres.

La Lista Nominal comprendió el 98.33% del padrón electoral, quedando integrada por 93,832,484 ciudadanos, de los cuales, 48,662,801 (51.86%) son mujeres y 45,169,683 (48.14%) son hombres (INE 2022-1, *Op. cit.* 68-72).

Por otra parte, la autoridad administrativa electoral recibió un total de 188 quejas y denuncias, de las cuales 171 fueron procedimientos especiales sancionadores; 5 como procedimientos ordinarios sancionadores y 12 cuadernos de antecedentes, siendo la propaganda contraria a la norma, las violaciones al artículo 134 constitucional, así como adquisición de tiempos en radio y televisión los hechos denunciados con mayor frecuencia (INE 2022-3, *Op. cit.*, 130-1).

Asimismo, la autoridad electoral recibió 159 solicitudes de medidas cautelares, de lo que destaca que en 28 casos se declaró su procedencia; 23 casos de improcedencia y el resto de los casos fueron atendidos a partir de diversas circunstancias. (*Ibidem*, 131-2).

Como puede observarse de los datos referidos, si bien la revocación de mandato no tuvo la dimensión de un proceso electoral constitucional, sí tuvo una magnitud significativa en el territorio nacional que implicó el despliegue de atribuciones por parte de las autoridades electorales y una vasta convocatoria a la ciudadanía para que se involucrara y participara en las distintas fases de la organización del proceso. Ello, sin pasar por alto los obstáculos, de naturaleza eminentemente presupuestal que enfrentó el mecanismo y que repercutieron de manera directa en el desarrollo de diversos aspectos, tales como el número de casillas a instalar.

Todo lo anterior pone de manifiesto, por una parte, la relevancia cada vez mayor no sólo de la revocación de mandato, sino de todos los mecanismos de participación ciudadana como una vía que permite a la ciudadanía una mayor proximidad con sus gobernantes y representantes e involucramiento más directo en su gestión, así como la posibilidad de un puntual escrutinio y evaluación del desempeño, con efectos diversos como la destitución del cargo, como en el caso que nos ocupa.

2. Desarrollo jurisdiccional de la Revocación de Mandato 2022

Como se refirió con anterioridad, el carácter novedoso de la implementación de la revocación de mandato para el titular del Poder Ejecutivo Federal y las deficiencias del marco normativo fueron factores determinantes para que surgieran controversias que debieron ser resueltas por las autoridades

jurisdiccionales y cuyos criterios y precedentes constituyeron válvulas que posibilitaron no sólo la continuidad de la organización del proceso, sino que éste se llevara a cabo y concluyera en condiciones pacíficas y dentro del marco legal e institucional.

Atento a lo anterior, a continuación, se analizan diversos asuntos en los que la intervención jurisdiccional resultó determinante y que, a través de la interpretación integral del orden jurídico se colmaron deficiencias del marco normativo que, de subsistir, habrían comprometido la adecuada organización del proceso en comento.

a) Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación de Mandato

El 27 de agosto de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por el que expidió el ordenamiento que se analiza, sustentando su determinación en la proximidad de la conclusión del tercer año de gestión del titular del Ejecutivo Federal; la proximidad de la fecha límite para presentar el proyecto de presupuesto de egresos institucional para el ejercicio 2022, así como en la omisión del Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria respectiva dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto de reforma constitucional, lo que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2019 y el hecho de que, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó expedir la referida ley dentro de un plazo de 30 días naturales, aun dando cumplimiento a dicho mandato, el INE habría quedado imposibilitado de presentar oportunamente el proyecto de presupuesto de egresos que ya incluyera la eventual celebración del proceso de participación ciudadana de mérito (INE 2021, 23-4).

En la misma fecha, la autoridad electoral aprobó su presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, del que destaca la previsión de \$5,743,573,799 por concepto de mecanismos de participación ciudadana, de los cuales \$3,830,448,091 correspondían a la revocación de mandato y \$1,913,125,708 a una eventual consulta popular, según se advierte del Acuerdo INE/CG51/2022, del 4 de febrero de 2022. (INE 2022-4, 5).

Es importante señalar que si bien la aprobación de los Lineamientos propiamente dicha no fue materia de controversia o impugnación, destaca que éstos atendieron a una circunstancia considerada apremiante y urgente por parte de la autoridad electoral, consistente en la omisión del Congreso de la Unión de expedir la legislación correspondiente, y que no fue sino hasta el 14 de septiembre del mismo año que se publicó la Ley Federal de Revocación de Mandato, lo que motivó que el 30 siguiente el

INE aprobara diverso Acuerdo para llevar a cabo las adecuaciones necesarias correspondientes, entre las que destacó la recepción de firmas a través de una aplicación electrónica (INE 2021-1, 54-5) Tanto la expedición de la ley de la materia como la adecuación de los Lineamientos tuvieron como ejes rectores la adecuada organización del proceso, así como dotar de certeza el mismo y garantizar la armonía y operatividad del orden jurídico, aunado al hecho de que los referidos lineamientos serían reformados subsecuentemente en cumplimiento de determinaciones jurisdiccionales.

b) Pregunta que se puso a consideración de la ciudadanía

El artículo 19, fracción V de la Ley Federal de Revocación de Mandato determina que entre el contenido de la Convocatoria a dicho mecanismo de participación ciudadana debe encontrarse la pregunta que se pondrá a consideración de la ciudadanía y que, en el caso concreto es la siguiente: *¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?* (LFRM, Artículo 19, fracción V, 2021).

Inconformes con tal determinación, diversos diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión promovieron Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir, entre otras, la disposición en comento.

Los actores de dicho juicio constitucional plantearon, esencialmente, que la redacción de la pregunta desnaturalizaba el mecanismo, aunado a que podría resultar confusa, en virtud de que en realidad se estaban formulando dos preguntas, la primera, sobre la remoción del cargo y la segunda, sobre si debía continuar en el mismo, lo que implicaba que se estuviera consultando, en realidad, sobre su ratificación. En este sentido, se alegó la invalidez de las porciones normativas relativas a la pérdida de la confianza, y a la permanencia en el cargo hasta la conclusión del período para el que fue electo. Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal manifestó, medularmente, que el texto constitucional no señala alguna pregunta o los parámetros de su configuración, y menos aún, reduce opciones de respuesta a un formato rígido, por lo que dicho rubro es de libre configuración normativa y debe estar orientado a permitir el ejercicio del derecho ciudadano a la participación.

En el proyecto elaborado por el Ministro ponente, se razonó que

El problema de la pregunta surge a partir de la disyuntiva que contiene, en tanto que, por un lado, se pregunta si debe revocarse el mandato; pero, por el otro, se pregunta si es deseo que el Presidente de la República continúe su mandato hasta que termine su periodo. Así, en realidad,

materialmente se están formulando dos preguntas en la que tendría que ser una sola interrogante, estando una de ellas sí referida de forma estricta a un ejercicio de revocación, pero la diversa, más bien infiere o da espacio a construir una pregunta sobre la ratificación, renovación o refrendo del nombramiento de quien es sujeto al referido ejercicio; situación que también se refleja en las opciones de respuesta que integran dicho sistema normativo. Esto, sin duda desnaturaliza el mecanismo en la intención en que fue aprobado por el Constituyente Permanente.

No pasa desapercibido que, precisamente, el efecto natural de un resultado negativo en un ejercicio de revocación del mandato, lo es que el respectivo funcionario permanezca en el cargo público y continúe su mandato hasta la conclusión del periodo por el que fue electo; no obstante, dicha consecuencia, por las razones ya abordadas previamente, no debe contaminar el diseño de la respectiva pregunta o de sus opciones de respuesta, sino sólo ser, en su caso, la secuela o efecto normal del resultado del ejercicio.

[...]

Ahora bien, atendiendo a que el diseño dual de la pregunta puede subsanarse a partir de la invalidez de una de sus porciones normativas y de las respectivas opciones de respuesta, únicamente se declara la invalidez de:

- La porción normativa contenida en el artículo 19, fracción V de la Ley Federal de Revocación de Mandato que indica: “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”... (Proyecto de sentencia Acción de Inconstitucionalidad 151/2021, 78-9).

Si bien el proyecto planteó la declaratoria de invalidez de la porción normativa transcrita, en la sentencia se advierte que dicha propuesta fue desestimada, al sólo haber alcanzado 7 votos de los 8 necesarios, por lo que la pregunta quedó en los términos previstos originariamente en la ley controvertida (Acción de Inconstitucionalidad 151/2021, 153).

c) Mecanismos para la recepción de firmas de los ciudadanos

El artículo 11 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establece, en su parte conducente, que el Instituto Nacional Electoral emitirá los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas (LFRM, Artículo 11, 2021).

Por su parte, el Consejo General del INE, al modificar los Lineamientos para la organización del mecanismo que se analiza en congruencia con la ley de la materia determinó, entre otros aspectos, que la recepción de firmas se llevaría a cabo a través de la aplicación electrónica con que cuenta el Instituto y que había sido ya utilizada en otros procesos. Dicha determinación se fundó, a su vez, en el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a propósito de la utilización, por primera vez, de la referida aplicación y que consistió, esencialmente en:

a) Resulta válido que haciendo uso de los avances tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como el que nos ocupa para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los apoyos recibidos;

- b) Se persigue un fin legítimo;
- c) Es una herramienta facilitadora de la labor de la autoridad;
- d) Se dota de mayor certeza los procedimientos y se maximiza el aprovechamiento de recursos humanos y tecnológicos.

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional ha establecido que resulta válido que las autoridades administrativas electorales utilicen los avances tecnológicos disponibles e implementen mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los apoyos (INE 2021-1, 45-8)

Por su parte, los recurrentes hicieron valer, entre otros agravios, que no se dio a la ciudadanía la libertad de decidir la forma de recolectar el apoyo ciudadano; indebida inaplicación de lo dispuesto por los artículos 11 y Tercero Transitorio del decreto que expide la ley de la materia; el impedimento de uso de formatos físicos viola lo dispuesto por el artículo 35 constitucional y 11 de la ley de la materia; sólo se autorizó la recolección de firmas en formato impreso bajo un régimen de excepción aplicable a 204 municipios de alta marginación, lo que es contrario a la ley, aunado a que si bien al INE le asiste la facultad reglamentaria, ésta no es de carácter absoluto (SUP-RAP-415/2021 y acum. 2021, 33-6).

Al dictar la sentencia correspondiente el 1 de noviembre de 2021, la Sala Superior determinó que los agravios eran fundados, ya que

...por así disponerlo en el caso la Ley Federal de Revocación de Mandato, como lo alega la parte recurrente, para recabar las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato, deben emplearse en todo el país, no solo en lugares de alta marginación, tanto formatos físicos como en dispositivos electrónicos, razón por la cual ambos tipos de formatos deben facilitarse en todo el país, no solo en lugares de alta marginación, para que queden a disposición de las personas interesadas en recabar apoyos y, en su caso, las y los ciudadanos interesados en apoyar el proceso de revocación de mandato, elijan el medio —formato en papel o en dispositivo electrónico—, a través del cual otorgarán tal apoyo.

Sin que a dichas normas pueda dárseles una interpretación diversa, como la realizada por la autoridad electoral administrativa —en el sentido de que solo en lugares de alta marginación es posible utilizar formato de papel—, en tanto que, tal excepción, en el caso no está prevista, lo que conllevaría inobservar el mandato de la ley (*Ibidem*, 41-2).

En consecuencia, resolvió revocar el Acuerdo controvertido en la parte conducente, y ordenar al INE emitir uno distinto, en el que se “determine que para recabar las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato, deben facilitarse en todo el país, no solo en lugares de alta marginación, tanto formatos físicos como en dispositivos electrónicos, para que ambos tipos de formatos queden a disposición de las personas interesadas en recabar firmas de apoyo y, en su caso, las y los ciudadanos

interesados en apoyar el proceso de revocación de mandato, elijan el medio —formato en papel o en dispositivo electrónico—, a través del cual otorgarán tal apoyo” (*Ibidem*, 104).

Determinación que fue acatada por el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG1646/2021, dictado el 10 de noviembre de 2021 en el que destacaron que, en virtud del acatamiento de sentencia y la nueva modalidad de recepción de firmas, se tendrían que llevar a cabo acciones adicionales que no resultarían necesarias con el solo uso de la aplicación electrónica (INE 2021-2, 44-7)

d) Aspecto presupuestal de la Revocación de Mandato 2022

Uno de los temas de mayor complejidad y que motivó la emisión de diversos precedentes jurisdiccionales es el relativo a los recursos que se destinarían para la adecuada organización de la consulta de revocación del mandato prevista para 2022.

Al presentar su proyecto de presupuesto de egresos para ese año, el Instituto Nacional Electoral contempló gastos por un total de 18,827,742,268, los cuales se distribuirían de la siguiente manera:

- Presupuesto base: 11,225,455,783
- Cartera institucional de proyectos: 1,858,712,686
- Revocación de Mandato: 3,830,448,091
- Consulta Popular: 1,913,125,708

No obstante, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados determinó un recorte al Instituto Nacional Electoral por \$4,913,000,000, por lo que el Instituto promovió Controversia Constitucional, la cual quedó radicada con el número de expediente 209/2021.

Al respecto, el Ministro instructor determinó negar la suspensión respecto a que el INE realizara ajustes a su presupuesto para garantizar los recursos suficientes para la realización de la revocación de mandato ya que, en ese momento, dicho mecanismo de participación ciudadana aún era un acontecimiento futuro de realización incierta.

En congruencia con lo anterior, el INE determinó asignar a la organización de la revocación de mandato \$1,503 millones de pesos provenientes de la restructura de la Cartera de proyectos y de los ahorros generadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas (INE 2022-4, *Op. cit.*, 6-12).

Por otro lado, y ante la insuficiencia de recursos derivada de la reducción presupuestal referida, el 17 de diciembre de 2021 el Consejo General del INE determinó posponer temporalmente la realización de determinadas actividades de la revocación de mandato, con excepción de las relativas a la

verificación de firmas de apoyo ciudadano, hasta en tanto no hubiera condiciones presupuestarias óptimas que permitieran su reanudación (INE 2021-3, 77)

Esta determinación fue controvertida ante la Sala Superior ya que, a juicio de los recurrentes, el INE carecía de atribuciones para suspender la organización de la revocación de mandato.

Al respecto, al dictar sentencia en el expediente SUP-JE-282/2021 y acumulados, el órgano jurisdiccional determinó que los agravios resultaban fundados, ya que el Consejo General carecía de atribuciones para posponer o interrumpir el proceso en comento, pues el único supuesto normativo para ello que justifica la interrupción del proceso es la falta de satisfacción de los requisitos constitucionales y legales (SUP-JE-282/2021 y acumulados, 24).

Adicionalmente, se ordenó al INE realizar y gestionar las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades inherentes a la revocación de mandato o, de subsistir la insuficiencia, realizar las gestiones a que hubiera lugar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar las ampliaciones presupuestales que se requirieran (*Ibidem*, 45-6).

En congruencia con lo anterior, se ordenó a la Secretaría de Hacienda que, en caso de que el INE le presentara solicitud de ampliación presupuestaria, le debía dar respuesta de manera fundada y motivada a la brevedad, para materializar el derecho ciudadano de participar en el proceso de revocación de mandato (*Ibidem*, 48-9).

No pasa desapercibido, asimismo, que la suspensión del proceso de revocación de mandato decretada por el INE también fue controvertida, vía Controversia Constitucional, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Dichos juicios constitucionales quedaron radicados con las claves 224/2021 y 226/2021, respectivamente.

El 22 de diciembre de esa anualidad, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó Acuerdo por el que se otorgó suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para el efecto de que el INE se abstuviera de posponer de manera temporal cualquiera de las actividades de la Revocación de Mandato, debiendo dejar insubsistente el acuerdo INE/CG1796/2021, así como todos efectos y consecuencias del mismo, y continuar con la revocación de mandato. El 23 de diciembre se dictó Acuerdo de suspensión para la Controversia 226/2021, en los mismos términos que el ya referido (INE 2021-4, 8).

En cumplimiento de las determinaciones referidas, el 30 de diciembre de 2021 el Consejo General determinó, a través del Acuerdo INE/CG1798/2021, reanudar las actividades de organización de la

revocación de mandato, así como ordenar a la Secretaría Ejecutiva definir las adecuaciones presupuestales adicionales a las ya adoptadas y, de ser el caso, realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para solicitar la ampliación presupuestaria conducente (*Ibidem*, 30-1).

En observancia de la sentencia recaída en el expediente SUP-JE-282/2021 y sus acumulados, el 12 de enero del año en curso el Instituto solicitó a la Secretaría de Hacienda recursos adicionales por un importe de \$1,738,947,155 con la finalidad de que el Instituto pudiera continuar la organización de la revocación de mandato y hacer efectivo el derecho ciudadano de participación en dicho mecanismo.

Por su parte, el 31 de enero siguiente la Secretaría de Hacienda dio respuesta en el sentido de rechazar la solicitud formulada, por lo que el Instituto promovió el respectivo incidente de incumplimiento de sentencia; sin embargo, el mismo se declaró infundado, pues la Sala Superior determinó que la Secretaría de Hacienda “únicamente quedó vinculada, en su caso, a dar una respuesta al INE sobre su solicitud de ampliación presupuestal en un plazo breve y de manera fundada y motivada, en los términos ya precisados, sin que este órgano jurisdiccional ordenara en ningún apartado de la sentencia conceder la ampliación presupuestal” (Incidente de incumplimiento de sentencia SUP-JE-282/2021 y acumulados)

Finalmente, el 3 de febrero de 2022, se notificó a este Instituto el acuerdo por el que, la SCJN modificó la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021 en la Controversia Constitucional 209/2021, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto. Asimismo, estableció que la referida suspensión surtiría efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna (INE 2022-4, *Op. cit.* 35)

Es importante señalar que la referida Controversia fue resuelta de manera definitiva el 1 de junio de 2022 y, aunque la sentencia definitiva ya no resultó aplicable para la organización de la revocación del mandato, en la misma se determinó declarar la invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 en lo concerniente al Instituto Nacional Electoral, por lo que se ordenó a la Cámara de Diputados analizar y resolver lo que corresponda respecto del anteproyecto de presupuesto de egresos del referido órgano constitucional autónomo para el ejercicio 2020, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación de la ejecutoria (Controversia Constitucional 209/2021, 131).

Como puede advertirse del recuento expuesto sucintamente, el punto toral de controversia radicó en la reducción presupuestal significativa al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2022, en el que estaba previsto el mecanismo de revocación de mandato y la renuencia de diversas autoridades para otorgar la suficiencia presupuestal solicitada para cumplir con su atribución constitucional y legal, pues si bien es cierto que, en tanto órgano autónomo, puede llevar a cabo los ajustes presupuestales atinentes o necesarios para llevar a cabo de manera óptima sus actividades y cumplir sus obligaciones, lo cierto es que este tipo de situaciones podrían llegar a comprometer tareas sustantivas de un proceso electivo, como en este caso, entre otros, el número de casillas electorales que, cabe señalarlo, se volvió un reclamo de ciudadanos y actores políticos por cuanto a que ello pudo constituir un impedimento para que la ciudadanía ejerciera su derecho a la participación en el mecanismo que ahora nos ocupa. Experiencia que, en todo caso, constituye un precedente valioso para casos futuros y que debiera llamar a la reflexión en torno a un tema que si bien no es reciente, ha permanecido latente y consiste en la importancia o necesidad de blindar a determinados órganos o autoridades desde el ámbito presupuestal: es decir, que tengan garantizados los recursos que les resulten indispensables para el ejercicio de sus atribuciones, máxime cuando éstas se encuentren estrechamente relacionadas o puedan tener repercusión directa en derechos fundamentales de la ciudadanía, como el de participación política.

e) Otros factores que incidieron en la Revocación de Mandato

Como se señaló en la introducción de esta ponencia, además de los ya expuestos, existieron otros factores que si bien no versaron directamente en la organización de la revocación del mandato, sí repercutieron en la misma y pudieron haber surtido efectos o algún grado de incidencia sobre la participación ciudadana o el sentido del voto. En este punto, se analizan dos cuestiones que se consideran relevantes: por una parte, el Decreto interpretativo del alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2022, así como el desplegado de diversos servidores públicos mediante el cual se manifestó respaldo a la gestión del Presidente de la República, mientras se encontraba en curso no sólo la revocación de mandato, sino procesos electorales constitucionales.

Por lo que se refiere al primer caso, es importante señalar, en primera instancia, que el artículo 32 de la ley de la materia determinó lo siguiente:

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato (LFRM, Artículo 32, 2021).

Dichas previsiones fueron retomadas en la Base SEGUNDA de la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el período constitucional 2018-2024.

Como se puede advertir, dichas restricciones aplicaban para todo el transcurso de la organización de la revocación del mandato y hasta 3 días previos a la jornada comicial con la finalidad primordial de impedir que actores políticos se manifestaran a favor o en contra del mecanismo o sobre la respuesta que debía darse a la pregunta que se pondría a consideración de la ciudadanía.

Sin embargo, y ante el escenario de que los propios legisladores, entre otros servidores públicos, quedarían impedidos para hacer posicionamientos sobre diversos temas nacionales, se emitió el Decreto que se analiza, en cuyo Artículo Primero se estableció que “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables” (Secretaría de Gobernación 2022), con lo que se buscaba eludir la restricción prevista en la normatividad, aun si hubiera un proceso electivo o de participación ciudadana en curso.

Sin embargo, al conocer del caso, (SUP-REP-151/2022 y acumulados, 17-30), la Sala Superior determinó que el decreto referido tenía vicios de inconstitucionalidad, pues no se trataba, en realidad, de una interpretación de la norma sino que establecía una nueva disposición mediante la cual pretendió establecer una excepción a la prohibición de difusión de propaganda durante el desarrollo de un proceso electoral o de revocación de mandato, aunado a que el mismo no podría resultar aplicable en los procesos en curso, habida cuenta que no se había cumplido la temporalidad para hacer cambios normativos sustantivos, establecida por el artículo 105 constitucional (*Cfr.* Urrutia 2022).

Por lo que se refiere al segundo caso referido en este apartado, el mismo surgió con motivo del desplegado titulado “GOBERNADORAS Y GOBERNADORES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN”, así como diversas publicaciones en redes sociales.

Al respecto, el 23 de marzo de 2022, Movimiento Ciudadano presentó denuncia contra gobernadores de varias entidades federativas por la difusión de propaganda gubernamental en período prohibido durante el proceso de revocación de mandato, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y transgresión al principio de imparcialidad.

Al dictar la resolución correspondiente, la Sala Regional Especializada determinó la existencia de difusión de propaganda gubernamental en período prohibido del proceso de revocación del mandato, por las publicaciones en redes sociales y respecto de la publicación en el desplegado, promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad.

Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior pero además, la sentencia dictada resulta relevante porque determinó “vincular a todas las autoridades jurisdiccionales locales y federales electorales, para que, en la comisión de hechos posteriores a la presente ejecutoria, al resolver los procedimientos sancionadores, analicen si las infracciones a la Constitución, por servidores públicos, pueden afectar el requisito del modo honesto de vivir” (SUP-REP-362/2022 y acumulados, 62)

El criterio emitido por la Sala Superior se sustenta en que el modo honesto de vivir es un componente esencial de la ciudadanía. Si bien la acreditación del modo honesto de vivir es de buena fe, ya que no hay un medio idóneo que lo compruebe, la trascendencia de la ejecutoria y, en particular, del criterio que se analiza radica en que si existe una sentencia o registro que determine que dicho modo honesto de vivir se ha perdido, es inconcuso que tiene una repercusión directa sobre la calidad de ciudadanía que, cabe señalarlo, es requisito de elegibilidad para cualquier cargo electivo en el país.

De esta manera, y como lo razona la propia sentencia que se analiza, las sanciones a servidores públicos que se imponen en la actualidad han sido insuficientes e ineficaces para alcanzar su finalidad disuasiva e inhibitoria, por lo que es necesario avanzar en cuanto a sanciones y sus efectos en aras de seguir contribuyendo al fortalecimiento democrático del país y la calidad de procesos electorales y de participación ciudadana que se lleven a cabo.

Los casos referidos no han sido los únicos de naturaleza contenciosa que se llevaron a cabo en virtud o con motivo de la organización y desarrollo de la revocación de mandato en sus distintas etapas; sin embargo, los criterios emitidos resultan emblemáticos no sólo para la resolución de las controversias en virtud de las cuales se emitieron sino, como se planteó con anterioridad, para casos próximos de

cara a mejores procesos electorales y de participación ciudadana, orientados a la formación de cultura política y democrática y mejor calidad de la representación y la incidencia ciudadana en la gestión pública.

3. Dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la Revocación de Mandato

El artículo 55 de la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que en dichos procesos, el Tribunal Electoral tiene atribuciones para resolver los medios de impugnación que se presenten; realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran presentado; emitir la declaratoria de validez de la revocación de mandato y las demás que disponga la ley y demás disposiciones aplicables.

En cumplimiento de lo anterior, el 27 de abril la Sala Superior celebró Sesión Solemne a efecto de conocer y aprobar el cómputo final y emitir la declaratoria de conclusión del proceso de revocación de mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo para el período constitucional 2018-2024 (TEPJF 2022). Dicho instrumento fue publicado en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del mismo año.

En el documento de mérito se advierte que se tuvo por acreditada la emisión de un total de 16,502,636 votos en el proceso de revocación de mandato, lo que representa el 17.77% del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 1,063,209 votos, equivalentes a 6.4426% se pronunciaron por revocar el mandato al Presidente de la República, mientras que 15,159,323 votos (91.86%) se pronunciaron por su permanencia en el cargo.

De igual manera, la Sala Superior refiere la recepción de 14 demandas para impugnar el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se realizó el cómputo total y la declaratoria de resultados, de las cuales 12 correspondieron a juicios de inconformidad y 2 fueron recursos de apelación.

Por lo que respecta a los juicios de inconformidad, el órgano jurisdiccional determinó la improcedencia de los medios impugnativos, ya que al no haberse alcanzado la votación mínima requerida por la ley, el proceso no surtía efectos jurídicos.

En cuanto a uno de los recursos de apelación en uno se confirmó la resolución impugnada, mientras que en el otro caso se determinó el desechamiento, toda vez que el titular del Ejecutivo Federal carecía de interés jurídico y legítimo para controvertir el Acuerdo impugnado, ya que sólo tuvo la finalidad de informar a la ciudadanía.

Atento a lo anterior, la Sala Superior determinó que no se satisfizo el requisito constitucional y legal para considerar válido el proceso de revocación de mandato, pues no se alcanzó una participación equivalente a 40% de ciudadanos inscritos en la lista nominal y que se haya pronunciado por la revocación una mayoría absoluta.

Así, se determinó que ante la imposibilidad de surtir la consecuencia jurídica para que la revocación de mandato fuera válida y surtiera sus efectos jurídicos, dicho proceso se da por concluido y se declara improcedente la emisión de declaratoria de validez, por las razones apuntadas.

Aunado a lo anterior, resulta relevante el voto razonado que formularon tres Magistrados de la propia Sala Superior, a través del cual alertaron sobre diversas deficiencias y áreas de oportunidad que se observaron en el proceso de participación ciudadana que se analiza, entre las cuales destacaron: la omisión legislativa para emitir oportunamente la ley de la materia; el decreto de interpretación auténtica, que pretendió exceptuar el cumplimiento de la ley; así como los grandes retos que enfrentó la autoridad administrativa electoral para la organización del proceso, derivados primordialmente de la reducción presupuestal de que fue objeto y la renuencia de diversos órganos y autoridades para otorgar la suficiencia solicitada, lo cual se vio reflejado en aspectos como la verificación de firmas de apoyo ciudadano; un menor número de casillas; falta de personal e insumos esenciales; así como la presentación de quejas y denuncias y el dictado de medidas cautelares, varias de las cuales no fueron cumplidas a cabalidad.

En consecuencia, el voto razonado detectó algunas medidas que se podrían adoptar a futuro para mejorar la organización y desarrollo de estos mecanismos de participación ciudadana, a saber: emitir una legislación que atienda las características especiales de este mecanismo de participación ciudadana; garantizar la existencia de suficientes recursos presupuestales para el desarrollo de estos procesos con los estándares previstos constitucional y legalmente, así como permitir que se desarrolle como un ejercicio auténtico de participación ciudadana.

Aun cuando el documento que se analiza no lo refiere, también se considera relevante mejorar la regulación por cuanto a la prohibición de intervención o injerencia de servidores públicos de cualquier orden de gobierno u otros sujetos o actores, de manera que se evite que dichas intervenciones afecten la participación ciudadana y el sentido del voto.

Conclusiones

De lo expuesto en los apartados precedentes es posible desprender las siguientes conclusiones

- a) Los mecanismos de participación ciudadana se han venido implementando como vías de mayor acercamiento de la ciudadanía con sus gobernantes y representantes, para incidir y participar en la gestión pública, así como para ejercer escrutinio y evaluación del desempeño de dichos servidores públicos.
- b) Estos mecanismos no deben verse como una concesión de ningún gobierno, sino como logros de la sociedad mexicana luego de largos procesos de conquista de espacios y cauces de participación e incidencia en el ámbito público y, por ello, no se debe claudicar en estos avances democráticos ni dejar de participar, pues ello implica un contrasentido de las razones que le dieron sustento a la instauración de estos mecanismos en el ordenamiento mexicano.
- c) Las entidades federativas y la Federación cuentan con libertad de configuración legislativa para regular, en sus ámbitos de competencia, los mecanismos de participación ciudadana que mejor se ajusten a la realidad social, a las necesidades y exigencias vigentes en el momento determinado y respondan al contexto social, político, económico, cultural, entre otros aspectos. En este orden, la regulación que se emita deberá contemplar, entre otros aspectos, los requisitos de procedibilidad, los procedimientos para su realización, entre otros.
- d) No obstante, es indispensable que, para próximos ejercicios, se procure una mínima intervención de las autoridades jurisdiccionales, para lo cual deben precisarse algunos elementos que, según se ha puesto de manifiesto en la consulta de revocación celebrada, presentan una regulación deficiente, como el tema presupuestal, la difusión del proceso y la participación de servidores públicos en la misma, así como cuál es o debe ser el alcance del deber de informar que tienen las dependencias y órganos públicos, frente a no incidir o afectar de manera negativa la voluntad ciudadana.
- e) Un reto importante será la participación ciudadana que se alcance, sobre todo en un contexto de alta polarización e incluso desinformación sobre el proceso, aunado a que diversas voces de comunicadores, especialistas y otras figuras públicas hacen llamados a la no participación, desconociendo la esencia misma de la democracia.
- f) A pesar de los elementos positivos y virtuosos que se pueden advertir del mecanismo de participación ciudadana consistente en la revocación de mandato, el proceso que tuvo lugar en nuestro país entre 2021 y 2022 tuvo que afrontar algunas adversidades o situaciones desventajosas, como la expedición tardía de la ley de la materia; el recorte presupuestal a la autoridad electoral;

la injerencia indebida de servidores públicos y su renuencia a acatar a cabalidad las determinaciones de autoridad, entre otros rubros.

- g) No obstante las vicisitudes observadas, existen áreas de oportunidad y el mecanismo cuenta con alto potencial de fomento a la participación ciudadana; sin embargo, la experiencia muestra la necesidad de fortalecerle en diversos aspectos, como atribuciones expresas de cada autoridad; blindaje presupuestal; elementos de coerción para garantizar el cumplimiento efectivo y puntual de las determinaciones de autoridad, así como reglas claras en materia de difusión y propaganda y, de ser el caso, las modalidades de participación de servidores públicos, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.

Bibliografía

- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2019. México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_240_20dic19.pdf (Consultada el 23 de julio de 2022).
- Incidente de incumplimiento de sentencia SUP-JE-282/2021 y acumulados. Incidentista: Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://www.te.gob.mx/buscador/> (Consultada el 30 de julio de 2022).
- INE. Instituto Nacional Electoral. 2021. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueban los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124697/CGor202108-27-ap-1.pdf?sequence=9&isAllowed=y> (Consultada el 16 de julio de 2022).
- , 2021-1. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y sus anexos, con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125240/CGex202109-30-ap-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Consultada el 23 de julio de 2022).
- , 2021-2. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados, se modifican los Lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato y su Anexo Técnico. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125622/CGex202111-10-ap-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , 2021-3. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, atendiendo al principio de certeza y ante la insuficiencia presupuestal derivada de la reducción aprobada en el Anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, se determina posponer temporalmente la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126386/CG2ex202112-17-ap-Unico.pdf> (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , 2021-4. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en cumplimiento a los Acuerdos emitidos por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los incidentes de suspensión de las Controversias Constitucionales 224/2021 y 226/2021, y de la sentencia SUP-JE-282/2021 y sus acumulados, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determina continuar con la organización del proceso de Revocación de Mandato. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126403/CGex202112-30-Unico.pdf> (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , 2022. Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el período constitucional 2018-2024. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126857/CGex202202-04-ap-2-Convocatoria.pdf> (Consultada el 16 de julio de 2022).

- , 2022-1. Numeralia 2021-2022: Revocación de Mandato y Procesos Electorales Locales Ordinarios y Extraordinarios. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126873/Numeralia-08022022.pdf> (Consultada el 7 de agosto de 2022).
- , 2022-2. Informe final detallado y desagregado respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126774/CGex202201-31-ip-2.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2022).
- , 2022-3. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total y se realiza la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el período constitucional 2018-2024. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133148/CGex202204-10-ap-7.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2022).
- , 2022-4. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación a los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación de Mandato en cumplimiento al Acuerdo INE/CG13/2022, y derivado de la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de otorgar de manera excepcional recursos adicionales para el proceso de revocación de mandato. México: Instituto Nacional Electoral. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126858/CGex202202-04-ap-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Consultada el 16 de julio de 2022).
- LFRM. Ley Federal de Revocación de Mandato. 2021. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRM.pdf> (Consultada el 23 de julio de 2022).
- SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2022. Proyecto de sentencia a la Acción de Inconstitucionalidad 151/2021. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/Proyecto/AI151_2021PL.pdf (Consultada el 30 de julio de 2022).
- Secretaría de Gobernación. 2022. Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5646084 (Consultada el 30 de julio de 2022).
- Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 151/2021. Actores: Diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión. Autoridades responsables: Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2021/19/3_288950_6121.docx (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , Controversia Constitucional 209/2021. Actor: Instituto Nacional Electoral. Demandados: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y Poder Ejecutivo Federal. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2021/9/3_291095_6255.docx (Consultada el 30 de julio de 2022).

- , SUP-JE-282/2021 y acumulados. Actores: Presidente de la República y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0282-2021.pdf (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , SUP-RAP-415/2021 y acumulados. Actores: Morena y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0415-2021.pdf (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , SUP-REP-151/2022 y acumulados. Actores: Francisco Cortés Meza y otros. Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0151-2022.pdf (Consultada el 30 de julio de 2022).
- , SUP-REP-362/2022 y acumulados. Actores: Carlos Manuel Merino Campos y otros. Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0362-2022.pdf (Consultada el 30 de julio de 2022).
- TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2022. Cómputo final y declaratoria de conclusión del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo para el período constitucional 2018-2024. Disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-PRM-0001-2022.pdf (Consultado el 30 de julio de 2022).
- Urrutia, Alonso. 2022. “Confirma TEPJF inconstitucionalidad de decreto sobre propaganda” *La Jornada*. 28 de marzo. Sección Política. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/28/politica/confirma-tepjf-inconstitucionalidad-del-decreto-sobre-propaganda/> (Consultada el 30 de julio de 2022).